

Ciudad de México a 19 de marzo de 2025
CEAVICDMX/197/2025

LIC. EDGAR ALEJANDRO GÓMEZ JAIMES
COORDINADOR DEL REGISTRO DE VÍCTIMAS
PRESENTE.

En autos del JUICIO DE AMPARO 977/2021, promovido VERÓNICA VÁZQUEZ MATA, ante el juzgado DECIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO y en atención al OFICIO: 9803/2025 signado por la Secretaria del Juzgado, y recepcionado en esta Comisión el 12 de marzo de este año, se le solicita atender lo acordado por el Juzgado de Distrito, marcando copia del cumplimiento a esta oficina.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración lo anterior es necesario contestar en un plazo razonable.

En ese sentido, atienda en los términos procesales de las leyes de la materia, de manera general, al margen de prever la variada gama de casos que son atendidos por esta Comisión Ejecutiva cuasi-jurisdiccional, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que se conocen.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro "TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Por ello, esta Comisión, garante comprometida con la tutela de los derechos humanos confiados, requiere cumplir en los términos requeridos o bien manifieste la imposibilidad en caso de existir exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, fundamentando el carácter excepcional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Lic. Ernesto Alvarado Ruiz
Comisionado Ejecutivo de Atención a
Víctimas de la Ciudad de México.

Elaboró: RRE

Revisó: CVFC





PRINCIPAL

CUMPLIMIENTO

JUZGADO DECIMOSEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo
Indirecto

977/2021

V

mcm

ERC

9803/2025 COORDINADORA DEL REGISTRO DE VÍCTIMAS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)

10248/2025 COMISIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)

En los autos del juicio de amparo 977/2021, promovido por Verónica Vázquez Matz, contra actos de la autoridad Coordinadora del Registro de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y otra(s), se dictó un acuerdo o resolución que a la letra dice:

"Ciudad de México, a diez de marzo de dos mil veinticinco.

AUTORIZADO

Visto el escrito registrado con el número de correspondencia, 4972, presentado en este juzgado de distrito el tres de marzo de dos mil veinticinco, suscrito por la representante común de los quejosos y tomando en consideración el punto 1) de la certificación de cuenta, se tienen como autorizados en términos amplios de la parte quejosa a Víctor Alfonso del Pozo Rodríguez, quien tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente. Lo anterior conforme a la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo.

QUEJOSA FORMULA MANIFESTACIONES

Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta firmado por Víctor Alfonso Del Pozo Rodríguez, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por la parte quejosa, por el cual realiza manifestaciones en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia ejecutoria. Se tiene por hechas sus manifestaciones, para los efectos legales conducentes.

Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa en auto de veinticinco de febrero de dos mil veinticinco. El cual se le concedió a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la autoridad responsable adujo haber dado cumplimiento a la sentencia protectora.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA

Ahora bien, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, ningún juicio de amparo podrá archiversse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo. Por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a determinar si la ejecutoria se encuentra cumplida o no, con base en las constancias que obran en autos.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en la página 243, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)".

ANTECEDENTES

En el presente juicio, mediante sentencia dictada el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes:

1. Dejen de aplicarla Hipótesis Quinta del Acuerdo por el que se emiten las directrices para la transmisión y conclusión de los procesos iniciados bajo los lineamientos para el pago de la indemnización económica derivada de las recomendaciones o conciliaciones de la comisión de derechos humanos del Distrito



Recib: B.M.
B.M.C.H.
13-03-25 12:44



Federal o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aceptadas o suscritas por las autoridades recomendadas del Gobierno de la Ciudad de México a las que se encuentren dirigidas, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintiséis de agosto de dos mil veinte en la esfera jurídica de la parte quejosa, Hugo Martínez Gorostieta, Silvia León Porcayo, Hugo Martínez León, Guadalupe Jovita Josefina Gorostieta Albarrán, Venancio Zamora Lamus, Alan Ángel Zamora Gorostieta, Julia Martínez Gorostieta, Yusdari Murillo Martínez, Diana Porcayo y Ascencio y Rocío Trejo Porcayo, derivado de la solicitud de ingreso al registro de víctimas.

2. También con base en el artículo 78 de la Ley de Amparo, los efectos de esta declaración de inconstitucionalidad deberán extenderse a todas aquellas normas y actos cuya invalidez dependa de la propia norma invalidada y se traducirán en la inaplicación únicamente respecto de los peticionarios de amparo derivado del procedimiento de reparación.

3. Esto es, dejen insubsistente el Acuerdo de fecha nueve de julio de dos mil veintiuno, relativo al trámite dado a la solicitud de ingreso al registro de víctimas, y la terminación del procedimiento natural del índice de la Coordinadora del Registro de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.

4. Emita otra resolución, debidamente fundada y motivada en la que valore la solicitud de ingreso al registro de víctimas de los quejosos, en la que, al pronunciarse, con libertad de jurisdicción, resuelva nuevamente lo conducente, con fundamento en el marco normativo precisado en el cuerpo de este fallo constitucional.

Dicha sentencia fue confirmada en sesión de diecinueve de enero de dos mil veintitrés por el Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 183/2022. Por auto de nueve de febrero de veintitrés se recibió el testimonio de dicha ejecutoria. Asimismo, se requirió el cumplimiento del fallo protector.

Por auto de trece de marzo de dos mil veinticuatro, se aclaró la sentencia ejecutoriada, para incluir en el cumplimiento a Ma. Concepción Porcayo Ascencio y a Juan Carlos Porcayo Ascencio, y se corrigieron los nombres de las quejosas Julieta Martínez Gorostieta y Diana Porcayo Ascencio.

Previos requerimientos, por oficios recibidos en la oficina de partes de este juzgado bajo los folios 9624 y 4321, el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México adujo haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo. Para lo cual exhibió de forma digitalizada las siguientes constancias:

a) "ACUERDO POR EL QUE SE DEJA INSUBSISTENTE EL "ACUERDO POR EL QUE SE INFORMATIVO RESPECTO DEL TRÁMITE DADO A LA SOLICITUD DE INGRESO AL REGISTRO", DE FECHA 09 DE JULIO DE 2021, RESPECTO A LAS PERSONAS USUARIAS HUGO MARTÍNEZ GOROSTIETA, SILVIA LEÓN PORCAYO Y HUGO MARTÍNEZ LEÓN" de doce de abril de dos mil veintitrés.

b) Oficio CEAVICOMX/DFVCOMX/RELOVI/59/2025, de catorce de febrero de dos mil veinticinco.

c) Correo electrónico dirigido a Silvia León Porcayo, de dieciocho de febrero de dos mil veinticinco, por medio del cual se le notifica el Oficio CEAVICOMX/DFVCOMX/RELOVI/59/2025, de catorce de febrero de dos mil veinticinco.

Documentos que se hizo del conocimiento de la parte quejosa mediante la vista personal ordenada en proveído de veinticinco de febrero de dos mil veinticinco.

Sentado lo anterior, se impone precisar que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se advierte, entre otras cuestiones, que la ejecutoria de amparo deberá ser puntualmente cumplida. Y, que una vez transcurrido el plazo relativo a la vista otorgada al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la determinación en la que se declare si la sentencia está cumplida o no lo está. Asimismo, que el juez de amparo tiene la facultad para que en el caso en que una ejecutoria no esté cumplida, no esté cumplida totalmente, no se acate correctamente o se considere de imposible cumplimiento, remita los autos al Tribunal Colegiado de Circuito.

El artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se encuentra cumplida cuando lo sea en su totalidad sin excesos ni defectos. En el entendido que el objeto de las sentencias que amparan es restituir al agraviado en el goce de sus derechos violados. Restableciendo las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de que fueran violentadas, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo. Y cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que este exija. Así, cuando la autoridad actúa en los términos anteriores es indudable que dará puntual y completo cumplimiento a la ejecutoria de amparo.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**Amparo
Indirecto**

977/2021

V

mcm

ERC

PRINCIPAL

CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD

De esta forma, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, las obligaciones de la autoridad responsable **Coordinador del Registro de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México**, consisten en:

1. **Dejar de aplicar la Hipótesis Quinta del Acuerdo por el que se emiten las directrices para la transmisión y conclusión de los procesos iniciados bajo los lineamientos para el pago de la indemnización económica derivada de las recomendaciones o conciliaciones de la comisión de derechos humanos del Distrito Federal o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aceptadas o suscritas por las autoridades recomendadas del Gobierno de la Ciudad de México a las que se encuentren dirigidas, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintisiete de agosto de dos mil veinte en la esfera jurídica de los quejosos.**
2. **Dejar insubsistente el Acuerdo de fecha nueve de julio de dos mil veintiuno, relativo al trámite dado a la solicitud de ingreso al registro de víctimas, y la terminación del procedimiento natural del índice de la Coordinadora del Registro de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.**
3. **Emita otra resolución, debidamente fundada y motivada en la que valore la solicitud de ingreso al registro de víctimas de los quejosos, en la que, al pronunciarse, con libertad de jurisdicción, resuelva nuevamente lo conducente, con fundamento en el marco normativo precisado en el cuerpo de este fallo constitucional."**

Bajo ese contexto es importante precisar que mediante provida de trece de marzo de dos mil veinticuatro, se realizó la aclaración de la sentencia ejecutoria y se precisó que los nombres de los quejosos a los que se les concedió el amparo en presente juicio de amparo son los siguientes: Hugo Martínez Gorostieta, Silvia León Porcayo, Hugo Martínez León, Guadalupe Jovita Josefina Gorostieta Albarran, Venancio Zamora Lamus, Alan Ángel Zamora Gorostieta, Julieta Martínez Gorostieta, Ysabel Murillo Martínez, Diana Porcayo Ascencio, Rocio Trejo Porcayo, Juan Carlos Porcayo Ascencio y Ma. Concepción Porcayo Ascencio.

Ahora bien, con la finalidad de determinar si se ha dado o no cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se procede al estudio de las constancias que obran en autos. A las cuales la suscrita otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 de Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Pues se trata de actuaciones de la autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo cual encuentra apoyo en la jurisprudencia número 226, publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO."

VALORACIÓN DE LAS CONSTANCIAS

En ese contexto, del documento descrito anteriormente, se advierte que la autoridad responsable realizó lo siguiente:

- **Determinó es jurídicamente improcedente aplicar la Hipótesis Quinta del "Acuerdo por el que se emiten las directrices para la transmisión y conclusión de los procesos iniciados bajo los lineamientos para el pago de la indemnización económica derivada de las recomendaciones o conciliaciones de la comisión de derechos humanos del Distrito Federal o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aceptadas o suscritas por las autoridades recomendadas del Gobierno de la Ciudad de México a las que se encuentren dirigidas, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintisiete de agosto de dos mil veinte", a los quejosos Hugo Martínez Gorostieta, Silvia León Porcayo, Hugo Martínez León.**
- **Dejó insubsistente el acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno, denominado "ACUERDO POR EL QUE SE INFORMATIVO RESPECTO DEL TRAMITE DADO A LA SOLICITUD DE INGRESO AL REGISTRO".**
- **Se emitió otra resolución a través del oficio CEAVICDMX/DFVCDMX/RELOVI/59/2025, de catorce de febrero de dos mil veinticinco.**

Ahora, si bien la autoridad acredita haber dejado de aplicar a la esfera jurídica de los quejosos la Hipótesis Quinta del "Acuerdo por el que se emiten las directrices para la transmisión y conclusión de los procesos iniciados bajo los lineamientos para el pago de la indemnización económica derivada de las recomendaciones o conciliaciones de la comisión de derechos humanos del Distrito Federal o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aceptadas o suscritas por las autoridades recomendadas del Gobierno de la Ciudad de México a las que se encuentren dirigidas, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintisiete de agosto de dos mil veinte" y haber dejado sin efectos el acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno. Lo cierto es que al emitir la nueva resolución la autoridad responsable fue omisa en pronunciarse respecto de los quejoso Juan Carlos Porcayo Ascencio y Ma. Concepción Porcayo Ascencio, además de que se pronunció respecto de Diana Porcayo y Ascencio cuando el nombre correcto de la quejosa es



Defecto en el cumplimiento

En virtud de lo anterior, se determina que la autoridad responsable incurrió en defecto en el cumplimiento de la sentencia ejecutoria. Por lo que deberá emitir una nueva resolución debidamente fundada y motivada en la que valore la solicitud de ingreso al registro de víctimas de la totalidad de quejosos Hugo Martínez Gorostieta, Silvia León Porcayo, Hugo Martínez León, Guadalupe Jovita Josefina Gorostieta Albarran, Venancio Zamora Lemus, Alan Ángel Zamora Gorostieta, Julieta Martínez Gorostieta, Yusdari Murillo Martínez, Diana Porcayo Ascencio, Rocío Trejo Porcayo, Juan Carlos Porcayo Ascencio y Ma. Concepción Porcayo Ascencio con sus nombres correctos.

REQUERIMIENTO

En tal virtud, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se **REQUIERE** a la autoridad **Coordinador de Registro de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México**, para que en el plazo de **TRES DÍAS**, contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este auto, dé **cabal cumplimiento al fallo protector, en los términos siguientes:**

Deje sin efectos la resolución contenida en el Oficio CEAVIDMX/DFVCDMX/RELOVV/59/2025, de catorce de febrero de dos mil veinticinco y en su lugar, **emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada en la que valore la solicitud de ingreso al registro de víctimas de la totalidad de quejosos Hugo Martínez Gorostieta, Silvia León Porcayo, Hugo Martínez León, Guadalupe Jovita Josefina Gorostieta Albarran, Venancio Zamora Lemus, Alan Ángel Zamora Gorostieta, Julieta Martínez Gorostieta, Yusdari Murillo Martínez, Diana Porcayo Ascencio, Rocío Trejo Porcayo, Juan Carlos Porcayo Ascencio y Ma. Concepción Porcayo Ascencio con sus nombres correctos.**

En el entendido la autoridad requerida deberá exhibir al efecto copia certificada de las constancias con las que acredite el cumplimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en el tercer párrafo, del artículo 192 y el artículo 197 de la ya citada Ley de Amparo, **REQUIÉRASE** al la **Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México**, para que, en su calidad de **superior jerárquico** de la autoridad directamente responsable o vinculada a cumplir con el fallo protector, remita a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de **TRES DÍAS**, las constancias con las que acredite haber ordenado a aquella el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismos a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que, con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de amparo, o bien, para cumplirla por sí mismo.

Se destaca que **no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector para que se consideren colmadas sus obligaciones** en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos. Sino que **debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular o imponer a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo.** De lo contrario, la persona juzgadora de amparo debe considerar insuficiente la intervención de la superior jerárquica y, por tanto, que **es acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se fílen como renuentes.**

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 108/2022 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2025145. Su rubro es: **"CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO, PARA CONSIDERAR COLMADAS SUS OBLIGACIONES, ES INSUFICIENTE QUE LA PERSONA SUPERIOR JERÁRQUICA DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO SE CONCRETE A INFORMAR QUE ENVIÓ UN OFICIO PARA INSISTIRLES EN EL ACATAMIENTO."**

En el entendido de que:

- 1.- Deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo;
- 2.- Con fundamento en lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la ley antes transcrita, **se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo;** asimismo, el superior jerárquico debe demostrar que dio la orden a la directo responsable o, en su caso, que llevó a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí misma;
- 3.- Que **en caso de no hacerlo así, sin causa justificada, se realizará lo siguiente:**
 - a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada.
 - b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular una multa por cien veces la Unidad de Medida y Actualización.
 - c) Con fundamento en los artículos 192 y 194 de la ley ya citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inefecución, que pueda



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**Amparo
Indirecto**

977/2021

V

mcm

ERC

PRINCIPAL

CUMPLIMIENTO

culminar con la separación de su puesto y su consignación.

Lo anterior se determina toda vez que, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. Y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional.

*Asimismo, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del **DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL**.*

En virtud de lo anterior, por el momento no es procedente tramitar el incidente de inexecución de sentencia que solicita el promovente.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma Elizabeth Trejo Galán, Jueza Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ante la Secretaria Erika Rojas Chavarria, quien autoriza y da fe. Doy fe. Firmas y Rúbricas."

Lo que hago de su conocimiento para todos los efectos legales conducentes.

Ciudad de México, a diez de marzo de dos mil veinticinco.

La Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la
Ciudad de México



Erika Rojas Chavarria

JUZGADO DECIMOSEGUNDO DE DISTRITO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
EN LA CIUDAD DE MÉXICO



